

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)**

Septiembre 21 de 2022: Al despacho el proceso contra **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** identificado con C.C. No. 16.608.241, informando que se recibe a través del correo institucional de este Juzgado el día 22 de julio de 2022, la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del interno. Sírvase proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Septiembre veintiuno (21) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0510

CUI	760013104002201000231
NI	2014-0669
Sentenciado:	CARLOS JULIO MORENO NAVARRO
Identificación:	C.C. No. 16.608.241
Delito:	HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HETEROGENEO CON EL DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL
Reclusión:	PRISION DOMICILIARIA – CPMS VILLET CUNDINAMARCA
Motivo:	Solicitud de libertad Condicional y reconocimiento de redención de pena
Decisión:	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL – no cumple el factor objetivo - 3/5 partes – RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Al despacho las presentes diligencias con la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para resolver sobre la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** identificado con C.C. No. 16.608.241, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la Carrera 1 A No. 19 A – 03 barrio Brasilia en Facatativá Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 23 de mayo de 2004, el Juzgado 4º Penal del Circuito Adjunto de Santiago de Cali mediante sentencia del 30 de noviembre de 2009, **CONDENÓ a CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** a la pena principal de **VEINTISÉIS (26) AÑOS DE PRISIÓN** y la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por el mismo término al de la pena principal, como autor responsable del delito de **HOMICIDIO AGRAVADO (artículo 104-1 del C.P.)**, **EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON EL DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL (artículo 365 del C.P.)**. **NO** **CONDENO** al infractor al pago de perjuicios materiales ni morales. El Juzgado fallador **NEGÓ** la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali, **CONFIRMO** el fallo condenatorio mediante decisión del 22 de septiembre de 2010.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal a través de providencia del 8 de junio de 2011 resolvió **INADMITIR** la demanda de casación interpuesta por el defensor de CARLOS JULIO MORENO NAVARRO y **CASAR** oficiosa y parcialmente la sentencia, para fijar **veinte (20) años** la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas allí impuesta al condenado.

El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 17 de junio de 2011.

CARLOS JULIO MORENO NAVARRO descuenta pena dentro del presente asunto desde el día **17 de septiembre de 2009**

El homologo 6º de Cali Valle, avocó conocimiento de las diligencias el 13 de diciembre de 2011 y dispuso remitir el expediente a los homologos de Yopal por auto del 25 de octubre de 2013.

El homólogo de Yopal avocó conocimiento del proceso el 24 de febrero de 2014, a través de providencia del 21 de abril de 2014, negó al interno la prisión domiciliaria por grave enfermedad, por auto del 3 de junio de 2014 reconoció al sentenciado, redención de pena de 4 meses y 27.37 días.

Mediante decisión del 28 de julio de 2014, el homólogo de Yopal concedió al interno la prisión domiciliaria prevista en el numeral 4 del artículo 314 del C.P.P., por presentar estado grave por enfermedad, quien en cumplimiento a lo dispuesto prestó caución por el equivalente a \$300.000, mediante póliza judicial 17-41-101050699 del 30 de julio de 2014 y en la misma fecha suscribió diligencia de compromiso, fijó el domicilio en la Calle 17 No. 3-40 de Facatativá Cundinamarca y por auto del 17 de septiembre de 2014 dispuso la remisión del expediente a esta agencia judicial.

Este Juzgado **AVOCÓ** conocimiento del asunto el 30 de septiembre de 2014 y por auto del 30 de octubre de 2014, extendió los efectos de la prisión domiciliaria, a su lugar de trabajo ubicado en la Carrera 2 No. 19 A – 30 barrio Brasília Facatativá a partir del 26 de diciembre de 2014, y **AUTORIZO** el cambio de residencia hacia la Carrera 2 No. 29 A – 30 barrio Brasília en Facatativá a partir del 26 de diciembre de 2014

Mediante auto del 14 de noviembre de 2014, este despacho dispuso dar alcance al auto proferido el 30 de octubre de 2014, en el sentido de corregir, aclarar y advertir que el condenado gozaría del permiso para trabajar ya no a partir del 26 de diciembre de 2014, sino a partir de la fecha de notificación del proveído en la cafetería ubicada en la Carrera 2 No. 19 A – 30 del barrio Brasília de Facatativá.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

A través de auto del 7 de enero de 2015 solicitó ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una nueva valoración médica al condenado para determinar la persistencia de las circunstancias de salud que dieron origen a la prisión domiciliaria, y el 18 de marzo de 2015, se requirió al interno para que informara de la vinculación a entidad promotora de salud, régimen contributivo o subsidiado y se comisionó al asistente social del Juzgado para que llevara a cabo la visita domiciliaria al lugar de residencia del condenado y el lugar de labor del mismo.

Esta agencia judicial mediante proveído del 10 de abril de 2015, reiteró la solicitud de examen médico legal ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y el 17 de abril de 2015, reiteró al condenado sobre la gestión de asignación cita prioritaria y sobre la información afiliación de EPS y mediante auto del 13 de mayo de 2015, se requirió nuevamente ante el Instituto de Medicina Legal la valoración del condenado, para que con los exámenes practicados y la historia clínica actualizada, se informara sobre la pertinencia o no de trasladar al interno de su domicilio al establecimiento penitenciario para cumplir con la condena impuesta, por su estado de salud.

El 12 de julio de 2015, este Juzgado requirió al condenado para que aportara los exámenes practicados a través de la EPS, previa valoración médica por el Instituto de Medicina Legal, y se requirió a las directivas del EPC VILLETA, para que gestionaran lo pertinente con prontitud para la valoración del condenado ante dicho Instituto.

Luego, el condenado rindió ante este despacho la declaración juramentada el 3 de julio de 2015, respecto a que ya no se encontraba trabajando en las actividades autorizadas mediante auto del 30 de octubre de 2014, por lo que indicó que por su estado de salud no puede permanecer mucho tiempo de pie y debe estar dentro de las 24 horas con pañal desechable, por lo cual no fue posible continuar desempeñando el trabajo en la cafetería y solicitó realizar actividades en artesanías, indicó haberse dirigido hacia la EPS CAFAM el día 2 de julio de 2015 al presentar quebrantos de salud y en la fecha 3 de julio de 2015 asistió al Juzgado para informar de la situación.

Mediante proveído del 3 de julio de 2015, se comunicó al sentenciado y centro carcelario de la cita en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica de Facatativá, Hospital San Rafael el día 9 de julio de 2015 a las 8:00 horas y el 15 de julio de 2015, reiteró al condenado sobre la práctica de exámenes a través de su EPS, o a través de CAPRECOM, sin excusas, ni dilaciones; el 9 de noviembre de 2015 reitero a CAPRECOM EPS, sobre la solicitud de la práctica del examen solicitado por el interno, sin justificar negativa en la existencia de un contrato con alguna IPS.

Por auto del 4 de septiembre de 2015 este despacho, solicitó ante el representante legal CAPRECOM EPS, al INPEC – y CPMS VILLETA, para que se garantizara la práctica del examen por especialista en urología para determinar el examen de salud del condenado y el 19 de octubre de 2015, reiteró a CAPRECOM EPS, que informara de la obligación de garantizar al condenado la práctica del examen solicitado y el día 9 de mayo de 2019, reiteró a CAPRECOM EPS, sobre el examen solicitado y solicitó ante Medicina Legal, se indicara la fecha y hora para la práctica de examen médico legal del interno.

A través de auto del 21 de junio de 2017, se comunicó al interno y directivas de la CPMS VILLETA, sobre la práctica de examen valoración médico legal para el 23 de junio de 2017 a las 8:00 am., y el 16 de enero de 2018, previo a revocatoria de la prisión domiciliaria requirió al condenado para que realizara la consecución de citas médicas de urología y Medicina Interna con el fin de evaluar la pertinencia de un nuevo examen por medicina legal, lo cual fue reiterado al interno el día 16 de noviembre de 2018.

Este Juzgado mediante auto del 28 de junio de 2019, resolvió abstenerse de autorizar el cambio de residencia al condenado y comisionó al asistente social del Juzgado para que

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

realizara la visita socio-familiar, a la Carrera 1 A No. 19 A – 03 barrio Brasilia en Facatativá y determinara el arraigo social y familiar y las condiciones de seguridad del mismo.

Mediante providencia del 1 de junio de 2020, autorizó el cambio de domicilio al condenado hacia la Carrera 1 A No. 19 A – 03 barrio Brasilia en Facatativá, lo cual fue informado a las directivas de la CPMS VILLETA y se solicitó ante el Instituto de Medicina Legal la asignación de cita para nueva valoración de examen médico legal al interno.

En esta oportunidad ingresa al despacho para dar trámite a la documentación procedente de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del condenado.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020¹ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios"*.

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección

¹ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*².

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena privado de la libertad en prisión domiciliaria en la Carrera 1 A No. 19 A – 03 barrio Brasilia en Facatativá Cundinamarca y vigilado por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007³.

En razón a la fecha de los hechos que dieron origen al proceso que se estudia – 23 de mayo de 2004 - se tiene que la actuación se surtió de conformidad con el Código Penal – *Ley 599 de 2000* - y el Código de Procedimiento Penal – *Ley 600 de 2000*-, luego la competencia funcional de este juzgado está determinada por los numerales 1º y 3º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000.

² CSJ RAD 794 (01-07-20)

³ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)³.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

*“(…) **ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN.** <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)”*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

“(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)”

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993, (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

*“(…) **ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)”

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
----------------------------	---------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------------

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

17890041	Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2020	CPMS Villeta – Regional Central	176	Sobresaliente	Buena
17977634	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020	CPMS Villeta – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
18088497	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	CPMS Villeta – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
18178849	Del 1 de abril al 30 de junio de 2021	CPMS Villeta – Regional Central	480	Sobresaliente	Buena
18268223	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021	CPMS Villeta – Regional Central	504	Sobresaliente	Buena
18370168	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021	CPMS Villeta – Regional Central	496	Sobresaliente	Buena
18446987	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022	CPMS Villeta – Regional Central	496	Sobresaliente	Buena
18555591	Del 1 de abril al 30 de junio de 2022	CPMS Villeta – Regional Central	472	Sobresaliente	Buena
<u>TOTAL</u>			<u>3600</u>		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **3600** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS**, es decir, **SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3 DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

La libertad condicional es uno de los mecanismos sustitutivos de la pena consagrados por el Legislador, en el cual el Estado en busca de prevenir la criminalidad, sustrae del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos y propende que su resocialización ha enmarcado unos requisitos que, al cumplirlos, benefician al infractor en su concesión **anticipada** de libertad bajo unas exigencias estipuladas en el artículo 65 de la Ley 599 de 2000.

En lo concerniente al instituto de libertad condicional expresa taxativamente la norma:

“ARTÍCULO 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

- 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
- 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
- 3. Que demuestre arraigo familiar y social.*

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”⁴ (resaltado fuera del texto original).

⁴ Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De conformidad con lo dispuesto por la norma citada de manera precedente, corresponde entonces verificar el cumplimiento de cada uno de los presupuestos determinados por la misma.

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

***Art. 471.-** “El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.” (Subrayado fuera del texto original) ⁵

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

***“Parágrafo 1°.** En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa” (Subrayado fuera de texto).*

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el infractor, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1° de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP)**, NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario no tendrá en cuenta los delitos endilgados para el mecanismo sustitutivo a estudiar, pero sí los demás presupuestos consignados en la norma.

4.4 Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

Al verificar el primero de los presupuestos, esto es, que el sentenciado cumpla con el requisito objetivo determinado por la ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **312 meses** de prisión impuesta al interno corresponde a **187 meses y 6 días**.

Ahora bien, se recibe la documentación procedente de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca allega la **Resolución Número 127 0104 del 19 de julio de 2022**, mediante la cual indica: “(...) en el caso que nos ocupa el Señor Interno MORENO NAVARRO CARLOS JULIO debe haber cumplido las 3/5 partes de la pena impuesta de 26

⁵ Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

Años 0 meses; tiempo de estadía en centro de reclusión así: desde el 17/09/2009 al 19/07/2022, corroborado con los registros de este centro Carcelario, sumado a ello al tiempo de redención por actividades válidas para descuento de pena realizadas por el mismo durante su reclusión, a criterio de este despacho cumple el tiempo mínimo requerido para acceder al beneficio que invoca (...).

Una vez verificado el expediente y conforme la documentación que obra dentro del mismo, el condenado ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **17 de septiembre de 2009** hasta la fecha.

En consecuencia, se determina que el interno en mención ha cumplido físicamente **4753 días que equivalen a 158 meses y 13 días de la pena impuesta.**

El sentenciado cuenta con un total de redenciones de pena de **12 meses y 12.37 días** reconocidas así:

- JEPMS Yopal, auto del 3 de junio de 2014, reconoce 4 meses, 27.37 días
- JEPMS Facativá, a través del presente auto interlocutorio No. 0510, reconoce 7 meses, 15 días.

En este orden de ideas se observa, que el infractor ha cumplido con un total de **CIENTO SETENTA (170) MESES y VEINTICINCO PUNTO TREINTA Y SIETE (25.37) DIAS de la pena impuesta.**

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	17 de septiembre de 2009
TIEMPO FÍSICO:	158 meses y 13 días
TIEMPO REDIMIDO:	12 meses y 12.37 días
TOTAL DESCONTADO:	170 meses y 25.37 días
PENA PRINCIPAL:	312 meses
3/5 PARTES DE LA PENA	187 meses y 6 días

Como se expresó, el sentenciado **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** hasta la fecha acumula un total de **CIENTO SETENTA (170) MESES y VEINTICINCO PUNTO TREINTA Y SIETE (25.37) DIAS** purgados de la pena impuesta, significando ello que **NO CUMPLE** con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Así las cosas, verificados como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo, el señor **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO, NO CUMPLE** con el total de los requisitos emanados de la norma (art 64 de la Ley 599 de 2000, modificada por el art 30 de la Ley 1709 de 2014), incluso, debe aclararse que el cumplimiento de uno u otro requisito no puede ser valorado en subsidio frente a la ausencia o incumplimiento de otro, y como quiera que **NO CUMPLE** con las 3/5 partes de la pena impuesta motivo por el cual **NO se HARÁ BENEFICIARIO POR AHORA** de la **LIBERTAD CONDICIONAL INVOCADA.**

4.5 Sobre la comisión y notificación al condenado

Teniendo en cuenta que **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Carrera 1 A No. 19 A – 03 barrio Brasilia en Facativá Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.



5.- OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, múltiples entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó conformado con un juez, un asistente social, un asistente administrativo, una secretaria y un sustanciador creado el pasado 9 de noviembre de 2020, para evacuar más de 4.602 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO, PONAL y Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá Cundinamarca, aparte de las prisiones domiciliarias.

Aunado a lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio conforme a la ley.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»⁶, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales,

⁶ Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

*en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,...*⁷

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley para la concesión del beneficio invocado.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión, ello no implica que este criterio que se adoptó, o que lo hayan adoptado otros despachos judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a emplearlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*⁸.

5.2. De la Situación Actual del Juzgado

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de

⁷ CSJ T 102248

⁸ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

6. DECISIÓN

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**,

RESUELVE:

PRIMERO. - RECONOCER a **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** identificado con C.C. No. 16.608.241, redención de pena por trabajo en equivalencia a **SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2020, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, del 1 de abril al 30 de junio de 2021, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y del 1 de abril al 30 de junio de 2022, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** identificado con C.C. No. 16.608.241, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **170 MESES y 25.37 DÍAS**.

TERCERO. - DENEGAR la concesión del beneficio penal de la Libertad Condicional, impetrado por **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO** identificado con C.C. No. 16.608.241, de conformidad con lo esbozado en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO. - Se ordena por la secretaría de este Despacho, **COMISIONAR** al Director de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, a fin de que se sirva **NOTIFICAR** personalmente la presente decisión al interno **CARLOS JULIO MORENO NAVARRO**, quien se encuentra recluido en ese Establecimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

QUINTO. - Por la Secretaria del Juzgado **PROCÉDASE** a remitir copia de la presente providencia a las Directivas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villeta Cundinamarca, para que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ